



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: LUZ MYRIAM AGUINAGA SERNA
Demandados: ACP COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 001 2019 00708
Sentencia: S-134

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuestos por la AFP PROTECCIÓN S.A. y en grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín el día 19 de octubre de 2022.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

LUZ MYRIAM AGUINAGA SERNA demandó a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia de la afiliación

efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS- por haberse obtenido de forma engañosa, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden al fondo privado de trasladar todos los aportes recibidos con sus intereses, bonos pensionales frutos y rendimientos a COLPENSIONES, para que esta reconozca la pensión desde que cumpla los requisitos. Pretende además se condene a las entidades demandadas a las costas.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 24 de diciembre de 1961; que se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- en el mes de mayo de 1980 y estuvo hasta julio de 1994; que se trasladó en julio de 1994 a PROTECCIÓN S.A. por aquiescencia de su empleador el Municipio de Medellín; que en la charla realizada por el fondo privado se ocupó de explicarle las virtudes, y la posibilidad de pensionarse anticipadamente, pero nunca se le explicó de forma detallada la consecuencia de su traslado, como tampoco el funcionamiento del RAIS; que no se le dio espacio para consultar la decisión del traslado; que nunca más volvió a recibir una asesoría por parte de PROTECCIÓN S.A. y no se le informó sobre la restricción de la edad para trasladarse; que en una asesoría brindada por PROTECCIÓN S.A. en el año 2019, en la entidad donde labora se le comunicó la noticia que su mesada pensional sería inferior a un millón de pesos así contara con un bien ingreso mensual como salario; que se siente engañada por la mala información recibida por parte de los asesores comerciales; y que solicitó el traslado de régimen a PROTECCIÓN el cual fue negado.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, PROTECCIÓN S.A. señala que es cierta la edad; que no le consta de manera directa la afiliación al RPMPD; que es cierta la afiliación a este fondo privado; que no es cierto que no se le haya brindado una completa información, toda vez que los asesores son

capacitados permanentemente para suministrar una información y asesoría completa y necesaria; que a la demandante se le brindó una información clara, cierta y veraz, atendiendo su situación particular; que la entidad siempre ha actuado de manera responsable y dirigente; y que no le consta las proyecciones pensionales extrajudiciales realizadas. Se opuso a cada una de las pretensiones por cuanto el traslado fue un acto existente, válido y exento de vicios. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y seguros previsionales cuando se declarara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe.

En el caso de COLPENSIONES, acepta la fecha de nacimiento de la demandante; niega la afiliación de la actora; y frente a los demás hechos expresa que no le constan por tratarse de situaciones ajenas a esta entidad. Se opuso a las pretensiones, toda vez que el traslado al RAIS fue válido. Como excepciones propuso inexistencia de presupuestos legales para decretar la ineficacia o nulidad del traslado de régimen, prescripción, compensación indexada de cualquier suma de dinero, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 19 de octubre de 2022, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación efectuada por la demandante al RAIS administrado por la AFP PROTECCIÓN S.A. y los posteriores traslados a COLMENA e ING, por falta del deber de información; **ORDENÓ** a COLPENSIONES a tener válidamente afiliada a la actora y a homologar las semanas cotizadas; **ORDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES el saldo total existente en la cuenta de ahorro individual de la demandante,

incluidos los porcentajes descontados para garantía de pensión mínima, cuotas de administración y seguros previsionales, los cuales deberán ser indexados desde la fecha en que se descontaron en cada administradora; y **CONDENÓ** en costas a PROTECCIÓN S.A.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, la apoderada de PROTECCIÓN S.A. presentó recurso de apelación de forma parcial frente al traslado de comisiones de administración y seguros previsionales, manifestando frente a las comisiones de administración que se debe tener en cuenta que son comisiones ya causadas durante la gerencia de los dineros, que fueron descuentos realizados conforme a la ley y se tienen como contraprestación debido a la buena administración de los mismos; que respecto del seguro previsional, afirma que mensualmente se le descontó este valor de la cuenta de ahorro individual de la actora para que en caso de un siniestro por invalidez o por sobrevivencia, la aseguradora pagara un valor adicional por esos conceptos; que la entidad se encuentra imposibilitada para recobrar ese dinero para enviarlo a COLPENSIONES, toda vez que la aseguradora es un tercero de buena fe y que en el régimen de prima media existe también este tipo de descuento, por lo que no tiene mérito trasladarlo a COLPENSIONES y mucho menos indexado.

Así mismo, se conoce del asunto también vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, la apoderada de la demandante, indicó en sus alegatos que PROTECCIÓN S.A. no demostró que al momento del traslado del régimen pensional que se le haya presentado una información clara, completa, comprensible, transparente, atendiendo a los términos establecidos por la Corte

Suprema de Justicia que debían cumplir las administradoras de fondos de pensiones al momento del traslado del régimen pensional o de las afiliaciones de potenciales afiliados; y que al existir la omisión al deber de información debe prosperar la ineficacia, debiéndose confirmar la sentencia.

A su turno, el apoderado de COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión a través de los cuales reitera la prohibición legal traída por la ley 797 de 2003 para el traslado y que la parte demandante demostró un actuar pasivo, lo cual no es admisible; que en caso de confirmarse la sentencia solicita trasladen todos los conceptos de manera indexada y discriminada; y que se revoque la sentencia para que se ordene al fondo privado que a título de perjuicios se le reconozca la pensión a la demandante o de manera subsidiaria indexe todos los conceptos.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por PROTECCIÓN S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: **i)** La señora LUZ MYRIAM AGUINAGA SERNA nació el 24 de diciembre de 1961; **ii)** que la actora comenzó su vida laboral al servicio del Municipio de Medellín desde el 14 de mayo de 1980; **iii)** que el 11 de julio de 1994 suscribió formulario de afiliación o traslado ante la AFP PROTECCIÓN S.A.¹; **iv)** que en el 26 de enero de 2000, se trasladó de PROTECCIÓN S.A. a COLMENA²; **v)** que el 1º de abril de 2000 se trasladó de COLMENA a la AFP ING; y **vi)** que en el 16 de abril de 2002³, se trasladó de SANTANDER (antes ING)

¹ Folio 43 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

² Folio 37 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

³ Folio 38 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

a PROTECCIÓN S.A., entidad a la cual se encuentra actualmente vinculada

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de las consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993⁴, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

⁴ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero”

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*"Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, se trasladó a PROTECCIÓN S.A., cuando se encontraba laborando en la Secretaría de Transportes y Transito de la Ciudad de Medellín, en donde se les realizó una reunión en grupo con varios compañeros, dándoles una charla en donde se les manifestó que el Seguro Social se iba a acabar y que debían pasarse para el fondo privado, que era lo que estaba moderando en ese momento, en donde iban a quedar mejor pensionadas; que en dicha charla llevaban detalles como bolígrafos, confites y otras cosas, y se dejaron convencer por esas cosas; que desconoce si le explicaron que iba a tener una cuenta individual, ya que al estar tan joven no entendía muy bien esas cosas; que no le explicaron en que consistía el derecho de retracto; que no le explicaron los requisitos para pensionarse; que no recuerda que le hayan dicho si se podía pensionar anticipadamente; y que no le hablaron de los rendimientos ni del límite de traslado.

De lo anterior no se deriva –entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las

repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

De igual forma, debe señalarse que por el simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación no puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis del caso en particular que contenga una proyección de la situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo se hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Es necesario indicar, que no es de recibo el argumento que trajo el apoderado de COLPENSIONES en sus alegatos relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, ya que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito *“... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o*

ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999", criterio que comparte plenamente esta Sala.

Se advierte además que la decisión en este proceso relacionada con la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., implicaría en un principio que la situación de la demandante retorne a su estado anterior, es decir, como vinculada al Municipio de Medellín.

Sin embargo, como dicha entidad actualmente no tiene la calidad de administradora de pensiones, como lo señaló la juez, y como la intención de la demandante plasmada con la solicitud presentada ante COLPENSIONES en el mes de julio de 2019, según documento visible en la página 11 y siguientes del archivo digital de los anexos de la demanda, es la selección del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, será ésta la entidad encargada de recibirla y de activar su afiliación, pues además así lo permite el art. 271 de la propia ley 100 de 1993 cuando dispone que ante una situación que atente contra los derechos del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, *"La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador"*.

Norma que se debe complementar con lo establecido en el Decreto 1068 de 1995 por medio del cual se reglamentó la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en los niveles departamental, municipal y distrital y cuyo artículo 2º dispone que una vez entre a regir el Sistema General de Pensiones, *"... los servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima media con prestación definida administrado por el ISS y el RAIS, administrado por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, AFP autorizadas por la Superintendencia Bancaria"*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación por PROTECCIÓN S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*"Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."*

En consecuencia, la decisión deberá ser **CONFIRMADA** en cuanto se le ordenó a PROTECCIÓN S.A. que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que la señora LUZ MYRIAM AGUINAGA SERNA estuvo vinculada a cada entidad.

Se advierte igualmente que la orden a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos mencionados, deben incluir la respectiva indexación tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, vale recordar que nuestro órgano de cierre en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en la sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826, frente a la indexación concluyó, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *"... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."*

Finalmente, en cuanto a los alegatos de COLPENSIONES, debe señalar la Sala que la finalidad de estos es ampliar o justificar más a fondo los temas debatidos en la apelación, y no para incorporar temas nuevos los cuales no fueron tratados en la primera instancia.

En consecuencia, la decisión deberá ser **CONFIRMADA** en todas sus partes.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1`160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, el día 19 de octubre de 2022.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1`160.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9ec2443900d31edddb7824f6e0db1b3bc529251a664a8c9ea275c617747f70b**

Documento generado en 19/05/2023 03:22:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>